

Cuando cesen los ERTE, muchas empresas no serán capaces de reactivar su actividad

res) tienen una moratoria de plazo tras la finalización del estado de alarma más prórrogas de dos meses, a lo que suman los que puedan declarar concursos voluntarios, con lo que las cifras de concursos de acreedores motivados por el Covid-19 serán muy patentes a partir de junio-julio.

“Se puede decir que en Europa, un país como Francia (que es muy eficiente en resolución de concursos) es capaz de absorber unos 52.000 anuales. Pero tiene mucha mayor dimensión económica y judicial. Por tanto, hay necesidad de plantear soluciones, no pueden todas estas insolencias que se van a producir resolverse a través del concurso”, remacha Alfred Albiol, presidente del Refor.

Tres vías

Adrián Thery, socio director del Departamento de Reestructuraciones e Insolencias de Garrigues en Madrid, constata que ha sido un fin de semana “de gran intensidad de peticiones de concurso”. Alerga de que “los empresarios no están acostumbrados a situaciones de este tipo”, y detalla que hay tres vías: “El concurso estándar, en el que se entra en caída libre, el más problemático”, y que ahora puede ser el más numeroso. Y aconseja otras dos herramientas: “La solicitud de concurso con apoyo de acreedores y propuesta de convenio, con posibilidad de venta de unidad productiva a un tercero, con lo que se liquida la sociedad pero la empresa o negocio subyacente sigue viva y sólo cambia la titularidad, que implica que la sociedad compra sin deuda y puede tener acceso a financiación, y la homologación de acuerdos de financiación por el juez, que se puede hacer sin tener que pasar por concurso y se logra extender el contenido a los acreedores disidentes”.

En esta línea se sitúa Alejandro Rey, socio de ABCGC Abogados especialista en Concursal, quien lleva todo el fin de semana atendiendo solicitudes de concursos, que recomienda en lo posible a las empresas buscar acuerdos de refinanciación.

Miquel Àngel Alonso, socio de Ecija, prepara una avalancha de concursos cuando se levante la suspensión de plazos del estado de alarma.

Los empresarios claman contra el caos regulatorio de Sánchez

REACCIONES/ Las principales patronales critican que el Gobierno actúa con improvisación, sin dialogar previamente con las empresas y sin un plan claro para mitigar los efectos de sus medidas.

J. Díaz. Madrid

La cacofonía en el Gobierno PSOE-Podemos, donde socialistas y morados defienden en muchos casos posturas distintas, y los abruptos volantes de los últimos días en la gestión de la crisis del coronavirus han echado más leña al fuego de la incertidumbre. Un caos político y regulatorio que, tal como advierten los empresarios, no es inocuo para el tejido productivo. El Gobierno, que hasta la semana pasada era contrario a un mayor parón productivo para no erosionar aún más los oscuros pronósticos sobre la economía, postura defendida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dio el pasado fin de semana un giro de 180 grados. El Ejecutivo anunció un nuevo decreto que restringía al máximo la actividad económica no esencial y que debía entrar en vigor ayer lunes pero cuyo contenido no se publicó en el BOE hasta poco antes de medianoche del domingo. El resultado fue un barullo legislativo que a pocas horas de su entrada en vigor sumió a las compañías en una incertidumbre aún más densa, obligó al Gobierno a improvisar una moratoria de 24 horas y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a disculparse por la tardanza en publicar la norma en el BOE, pero negando que la decisión fuera fruto de la improvisación.

Unas explicaciones que no convencieron en absoluto a los empresarios, sobre cuyas espaldas recaerá el coste de este nuevo frenazo productivo en forma de “permiso retribuido recuperable”. “Las medidas tomadas por el Gobierno para paralizar la actividad de los denominados servicios no esenciales son un ejemplo de improvisación”, afirmó ayer en declaraciones a EXPANSIÓN el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, quien añadió que “existe mucha incertidumbre sobre la aplicación de estas medidas en muchas empresas y autónomos y sobre la definición de sector esencial”. Fernández de Mesa, cuyas críticas se unen a las del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que acusa al Gobierno de “precipitación” en



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Palacio de la Moncloa.

sus últimas medidas para luchar contra la pandemia, reprochó al Ejecutivo su “falta de diálogo” con las empresas y “la inconsistencia de su plan”, lo que “va a causar problemas en muchos sectores”. Entre ellos el de la exportación, donde hay muchas compañías “que tienen stock al-

macenados y comprometidos” y que, según el vicepresidente de CEOE, deberían poder entregar para “no arriesgarse a perder cuota de mercado internacional”.

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, coincide en que el sector, hasta ahora uno de los

grandes motores de impulso de la economía, verá como quedan “pedidos pendientes de suministro”, pero va aún más allá y advierte de que esta decisión “es un golpe muy fuerte” para la economía y que “ahora es cuando el país se para de verdad”. Un escenario que Bonet anticipa dra-

Los expertos alertan de que las empresas sufrirán serios problemas de liquidez y solvencia

mático, ya que “va a haber problemas serios de liquidez y de solvencia” y, por tanto, muchas compañías se verán abocadas a la quiebra. Unos efectos sobre los que también alerta el presidente de Cephyme, Gerardo Cuerva, quien señala a EXPANSIÓN que “no se puede ir a un parón de actividad tan brutal sin poner en marcha una serie de medidas económicas, fiscales y de flexibilidad, que palién la situación de las empresas”, y subraya que “el sector industrial es especialmente complejo por sus procesos de producción y requiere una paralización mucho más programada”.

No han sido, ni mucho menos, las únicas voces críticas con el cerrojazo cuasi total de la actividad, que la patronal del azulejo, Ascer, criticó por “unilateral y desproporcionada”, mientras que el Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña tildó de “auténtico desbarajuste”.

Los presidentes regionales reclaman flexibilidad para aplicar el parón industrial

J.D. Madrid

Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos, pero es que en este caso no está lloviendo prácticamente a gusto de nadie. La gestión de la crisis del coronavirus del Gobierno de Sánchez no convence ni en su vertiente sanitaria, donde la mayoría de CCAA se queja del retraso en la llegada de material sanitario, ni en la económica, donde la reciente vuelta de tuerca al confinamiento y paralización de toda la actividad productiva considerada no esencial ha levantado ampollas no solo entre los presidentes regionales de la oposición, sino en las propias filas socialistas. Los presidentes de Aragón, Javier

Lambán, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidieron flexibilizar la aplicación del nuevo Decreto adaptándola a las “peculiaridades” de cada territorio, al tiempo que el presidente aragonés reclamó más medidas para proteger a pymes y autónomos y evitar que el parón forzoso provoque un daño “irrecuperable” en el tejido productivo.

García-Page y Lambán, dos de los barones habitualmente

El PP advierte de que no apoyará los últimos decretos del Gobierno si no hay modificaciones

más críticos con Sánchez, no fueron sin embargo los únicos contrapuntos socialistas a la gestión del Ejecutivo y a su *café para todos* sin previa consulta. La presidenta de Navarra, María Chivite, también pidió “flexibilidad en los tiempos de aplicación” del Decreto para que “las CCAA puedan determinar qué es lo esencial, porque cada comunidad tiene sus especificidades”, al tiempo que, en sintonía con Lambán, enfatizó que “cualquier medida de restricción debe ir acompañada de más medidas de protección social e incentivación económica”. En términos similares se expresó el presidente valenciano, Ximo Puig, quien

advirtió de que hay sectores que “no pueden parar de un día para otro”. Sus reivindicaciones se suman a las de los presidentes regionales de la oposición (Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras, Juanma Moreno...), donde las críticas arrecian por la falta de equipamiento sanitario y la precipitación con la que el Ejecutivo actúa en lo económico. Una improvisación que ayer llevó al presidente del PP, Pablo Casado, a amenazar con no respaldar los últimos dos decretos del Gobierno (prohibición de despedir por el coronavirus y el parón de la actividad no esencial) si no se introducen modificaciones.